

INalienable

ENCUENTROS CON OFICIALES DE LA LEY

MARZO DE 2021

Resumen ejecutivo

Mississippi es un estado de los lugareños— uno en que los inmigrantes indocumentados son una parte innegable. Casi el **80 por ciento** de los mississippianos indocumentados han vivido en los Estados Unidos durante más de cinco años. Estos individuos y sus familias, muchos de los cuales son hispanos, son nuestros amigos y vecinos. Conforman el tejido de nuestras comunidades. Como el **alcalde William Truly Jr.** de Canton articuló antes de un publico sobre las redadas de inmigración del 2019, los inmigrantes de Mississippi “no son pandilleros, violadores o asesinos, sino personas que trabajan, pagan impuestos, compran bienes y se cuidan mutuamente y a sus familias.”

A pesar de la posición indispensable de los inmigrantes a nivel local, los condados de Mississippi están clasificados como uno de los más **altos** del país en términos de su participación con inmigración

y control de aduanas (ICE). Compartimos espacios religiosos, nuestros hijos asisten a las mismas escuelas, sin embargo, los inmigrantes indocumentados y sus familias son cada vez más obligados a esconderse por la amenaza de las autoridades federales de inmigración cuya presencia en nuestras comunidades es posible a través de acuerdos con las fuerzas del orden local.

Este resumen de políticas describe varias maneras en que se lleva a cabo este enredo interinstitucional. Este escrito se divide en tres secciones. En primer lugar, se dirige a las retenciones de ICE, que extienden las detenciones locales que facilitan el traslado de un individuo a la de ICE. En segundo lugar, evalúa las prácticas y políticas estatales y locales que conducen a esa detención inicial. Por ultimo, proporciona recomendaciones para entidades locales, estatales y federales.

Retenciones de ICE

Un **informe** reciente del Instituto de Pólizas Migratorias encontró que “la mayoría de las detenciones y expulsiones de ICE se originan en cárceles locales y prisiones estatales.”

Atraves de las solicitudes de retenciones de ICE, las autoridades de inmigración federal

le piden a las cárceles locales que retenga a las personas hasta 48 horas adicionales después de su período de detención inicial. Estas solicitudes son puramente voluntarias – las fuerzas del orden local no tienen la obligación de retener a nadie para ICE. Sin embargo los datos del programa **TRAC Immigration** de la Universidad de Syracuse muestran que más de **40 condados** en Mississippi han recibido al menos una retención de ICE a partir de Junio 2020, que suman al menos 19,000 solicitudes de detención de ICE en el estado, con solamente una negación por la parte de la agencia receptora. Estas solicitudes de detención, aunque sean comunes, invitan a una serie de daños a la seguridad pública que ameritan un mayor escrutinio.

Obstrucción de la policía local

La colaboración con las retenciones de ICE a la larga obstruye la policía local. El sheriff del condado de Scott, Mike Lee, recuerda un caso en el que una mujer embarazada estaba detenida por cargos de delito menor cuando comenzó a tener complicaciones con su embarazo. “No voy a seguir reteniéndola aquí por un pequeño cargo de robo en una tienda...y poner a su bebé en riesgo. No somos un hospital. Así que la dejamos ir. Y después tuve a alguien de ICE diciéndome que manejé la situación mal”; es una desgracia que puedes meterte en problemas por no hacer una pregunta, por ayudar a alguien que está aquí para ganarse la vida, que salió de una situación drástica”, dice Lee. “Ellos [los inmigrantes indocumentados] son tan buenos como los ciudadanos en el condado de Scott como lo serian en su propio país de origen.”

La **mayoría** de los fiscales, jueces y agentes de policía informan que la intensificación de la aplicación de la ley de la inmigración también hace mas difícil proteger a las comunidades locales de la delincuencia.

Un **estudio** de UNC Chapel Hill muestra que la colaboración entre ICE y las jurisdicciones locales produce una percepción entre los inmigrantes hispanos que la aplicación de la ley no es una fuente de protección. El resultado es que no se denuncian una gran cantidad de delitos y emergencias, debido al riesgo de involucrar a ICE. El efecto en las víctimas inmigrantes y testigos de crímenes resulta en la mayor victimización de la comunidad hispana en su conjunto, porque los perpetradores asumen que no irán a la policía.

El jefe de la Policía de Canton, Mississippi, Otha Brown, **reconoció** que se trata de un “problema continuo” ya que en Diciembre del 2020, la casa de una familia local Guatemalteca fue irrupida, y dos jóvenes, una la cual estaba embarazada, fueron asesinados. Sobre la relación de su propia oficina con la comunidad, el sheriff Lee afirma, “Si usted es una víctima, queremos asegurarnos de que nos ocupamos de usted. Usted es parte de esta comunidad...Pero tenemos ese estigma de que trabajamos con ICE, así que si obstaculiza...haciendo nuestro trabajo aquí.

La pandemia COVID-19

En el momento actual, las retenciones del ICE también inflaman la pandemia COVID-19. Debido a que la liberación bajo fianza puede no resultar en la liberación de una persona sujeta a un detenido de ICE, estas personas a menudo permanecen bajo custodia preventiva más tiempo del que lo harían de otra manera. De este modo, las retenciones aumentan el número de personas detenidas, lo que, **según** los expertos en salud pública, puede “amplificar las epidemias”. El ex-director médico de Rikers Island, el Dr. Homer Venters, **reconoció** de manera similar que “[la cárcel] es básicamente un sistema diseñado para propagar enfermedades transmisibles”. Y después de que una persona es retenida en el centro, por lo general son puestos en detención de ICE, exponiéndolos aún más a COVID-19 como resultado de la decisión voluntaria de la policía local.

Estas amenazas son más que teóricas: al menos **20 personas** murieron bajo custodia de ICE en el año fiscal 2020. Eso es más del doble del número de personas que murieron en la detención de ICE durante el previo año fiscal. A lo largo de un año de esta pandemia,

también sabemos que estas enfermedades se extienden hacia el exterior, ya que el encarcelamiento continuo de muchos que no representan una amenaza para la seguridad pública ha afectado no sólo a los detenidos, sino también a las comunidades locales y al personal de los centros de detención, lo que ha abrumado los recursos médicos de Mississippi.

Impacto en las economías locales

Exacerbando el grave costo humano de las retenciones de ICE, estos acuerdos también drenan las economías locales. Por años, estos programas han sido criticados por una variedad de instituciones policíacas incluyendo el **Asociación de Jefes de Las Principales Ciudades** y el **Grupo de Trabajo Presidencial** sobre la póliza del Siglo XXI, por desviar los dólares de impuestos locales de las prioridades de la comunidad. El Centro para el Progreso Americano publicó un **informe** que analizó 40 localidades con 287(g) acuerdos actuales y encontró que los hogares de inmigrantes en esas comunidades generaron casi \$66 mil millones en poder de gasto y contribuyeron \$24 mil millones de dólares en ingresos fiscales. Las fábricas avícolas en Mississippi constituyen una industria **multi-billonaria**, cuyo patrimonio es generado en gran medida por mano de obra inmigrante documentada e indocumentada. Con una de las **economías mas débiles** del país, nuestro Estado no puede permitirse este ataque continuo contra algunos de sus miembros mas productivos.

Responsabilidad Legal

Las retenciones de ICE también representan responsabilidades legales para los oficiales locales. Un **informe** del Centro de Recursos de Inmigración encontró que “ICE viola regularmente la Constitución y las leyes federales mediante la emisión de detenidos ilegales”; sin embargo, la responsabilidad de dar cuenta de esas violaciones a menudo recae en las fuerzas de oficiales locales. Los tribunales federales han sostenido consistentemente que las agencias locales y los funcionarios pueden ser **demandados** por hacer efectivas las detenciones de ICE. La policía y los alguaciles de todo el país han pagado millones de dólares en daños, asentamientos y honorarios de abogados por arrestos de retención. El costo financiero de los detenidos de ICE en los recursos policiales locales se hizo mas evidente cuando el condado de Los

Ángeles pagó **un acuerdo de \$14 millones** después de una demanda colectiva contra la efectuación ilegal de las retenciones de ICE por parte de su departamento del alguacil.

La probabilidad de litigios en Mississippi sólo se

intensifica por la falta de educación en todas las oficinas policiales. Algunos policías locales, por ejemplo, incluso han admitido no saber que las personas retenidas en un centro deben ser liberadas después de 48 horas si no son detenidas por ICE.

Prácticas y pólizas

Los daños que surgen del enredo de las actividades policiales locales, estatales y federales no se limitan al proceso de detención de ICE. **Investigaciones** muestran que la existencia de un oleoducto de agencias locales y federales promueve violaciones de la Decimocuarta Enmienda a nivel local a través de caracterizaciones raciales y otras pólizas y practicas policiales abusivas.

Acoso rutinario

Los estudios confirman que los acuerdos de colaboración entre las fuerzas del orden locales y ICE se correlacionan con practicas policiales excesivas y discriminatorias. Un **estudio** sobre el programa 287(g)¹ en North Carolina encontró que los arreglos interinstitucionales se utilizan “principalmente para deportar a individuos que han cometido delitos menores y violaciones de conducción”, no delitos graves o violentos, como afirma ICE. En consecuencia, no había pruebas empíricas de una reducción de la delincuencia después de la implementación de 287(g). Sin embargo, hubo una mayor tasa de caracterización racial, por ejemplo, por una mayor concentración de puestos de control de trafico alrededor de lugares frecuentados por hispanos como iglesias católicas y ciertos parques de casas móviles.

Los hallazgos en Carolina del Norte reflejan experiencias comunes en Mississippi. Los registros públicos recopilados por *The Clarion-Ledger* en el 2017 mostraron que muchos de los **obstáculos** establecidos por el Departamento del Sheriff del Condado de

Madison en el 2007 estaban en áreas con mayores concentraciones de residentes afroamericanos o hispanos. Una demanda de la ACLU de Mississippi motivó a la creación de una Junta Asesora Comunitaria en el Condado de Madison para abordar estos abusos y otros abusos relacionados; sin embargo, las reuniones tienen una participación marcadamente baja entra la población hispana del condado, probablemente debido al persistente temor de la comunidad a los encuentros con la policía.

Lo que queda claro es que el maltrato es constante de parte de las operaciones de los oficiales de la ley, no sólo en el Condado de Madison, sino también en todo el estado. Por ejemplo, después de los recientes asesinatos en Canton, las conversaciones con la comunidad destacaron cómo un historial de mala conducta policial dejó a muchos **sintiéndose inseguros** y desconfiados a través de la investigación en curso.

El temor que muchos inmigrantes de Mississippi sienten en la presencia de las fuerzas del orden no sólo es producto de traumas pasados, sino también una reacción justificada al acoso continuo. Vanessa, una inmigrante de México que ha vivido en Mississippi durante casi dos décadas, reporta experiencias tan recientes como febrero de este año en las que sintió que fue detenida por la policía debido a su presunta nacionalidad. El testimonio comunitario también incluye la mención de retórica abusiva y escaladas injustificadas por parte de las fuerzas del orden. En un

¹ 287(g) acuerdos **delegan** la autoridad federal para llevar a cabo ciertas actividades de aplicación de la ley de inmigración a los oficiales de policía y ayudantes del sheriff. Mientras que los detenidos de ICE son efectuados caso por caso y se aplican a la detención de individuos, 287(g) acuerdos supuestamente dan a las fuerzas del orden locales una amplia autoridad para interrogar a los presuntos detenidos indocumentados, preparar documentos de acusación para iniciar procedimientos migratorios y/o participar en otras operaciones específicas para la aplicación de la ley de inmigración. Actualmente no hay 287(g) acuerdos en Mississippi.

caso, por ejemplo, una mujer entonces embarazada recuerda que fue detenida por un oficial que, sin previo aviso ni introducción, inmediatamente sacó su arma de fuego y gritó: “¡Abre la maldita ventana o te dispararé!”.

Sin excepción, todos los miembros de la comunidad que fueron entrevistados para este proyecto expresaron el sentimiento de que los hispanos de Mississippi – sin importar su conducta o estatus migratorio – son tratados “como criminales” por las fuerzas del orden locales y ICE. Estas palabras reflejan aquellas utilizadas por Lorena Quiroz, la directora ejecutiva de La Alianza Inmigratoria para la Justicia e Igualdad, en su testimonio del 2019 tras las redadas en las fábricas avícolas. Dos años y medio es demasiado largo para esperar el progreso en una cuestión que subvierte tan severamente los principios básicos de dignidad e igualdad.

Pólizas en el foco

Ciudades santuario

Mientras una serie de jurisdicciones han comenzado a promulgar pólizas estatales que restringen el uso del tiempo, dinero, u otros recursos de sus agencias de ser gastados en la aplicación de leyes inmigratorias, Mississippi queda entre los pocos estados que han pasado leyes de “preferencia estatal” para limitar las autoridades de las jurisdicciones locales para regular la cooperación de sus agentes con ICE. La ley de Mississippi de 2017 (SB 2710) es probablemente una respuesta a una ordenanza anti-caracterizaciones en Jackson que han estado desde el 2010 sin algún problema. Aunque la ley estatal ahora prohíbe ciudades santuario en Mississippi, es importante señalar que las pólizas de las ciudades santuario tienen innumerables beneficios, que han sido oscurecidos por varios mitos recurrentes:

Mito: Las pólizas de santuario “generan crimen”.

Realidad: Las pólizas de santuario no resultan en aumento en el índice de delincuencia. A lo contrario, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes informa que “las comunidades con pólizas de santuario tienen mayores promedios de ingreso, menor pobreza, menores tasas de crimen, y menor desempleo que las comunidades que no las tienen”. Una razón

porque se reduce la tasa de criminalidad puede ser porque los inmigrantes indocumentados en ciudades santuario se sienten mas seguras reportando crímenes o emergencias que aquellos que viven bajo la amenaza de la aplicación de las leyes de inmigración.

Mito: Las pólizas de santuario obstruyen el cumplimiento de la ley federal.

Realidad: Los tribunales de todo el país han sostenido que los estados y las localidades tienen derecho constitucionalmente a optar por no cumplir con la ley federal, y nada en la ley federal ordena su participación. De hecho, la prevención de la investigación sobre el estatus migratorio de las personas garantiza la igualdad de trato bajo la ley y evita las violaciones de la Cuarta Enmienda que surgen a través de las retenciones de ICE. Las políticas de santuario también se alinean con el espíritu de nuestro sistema legal penal, que rechaza el doble castigo, al asegurar que la aplicación de la ley penal no conduzca también a la aplicación de la ley de inmigración.

Las pólizas santuario permiten a los inmigrantes y sus familias ser participantes en sus comunidades. Una encuesta realizada en San Diego encontró que la mayoría de los encuestados eran más propensos a hacer negocios, participar en eventos públicos, colocar a sus hijos en programas después de la escuela o guardería, y buscar empleo – todo el comportamiento que las comunidades de Mississippi alientan – si se les asegura que los oficiales de ley locales no van a cooperar con ICE.

Identificación emitida por el gobierno

Los documentos de estado son una herramienta esencial para la vida cotidiana que la mayoría de los mississippianos indocumentados son negados a grandes consecuencias. Por ejemplo, la falta de identificación es una fuente de los obstáculos crónicos a los que se enfrentan los inmigrantes indocumentados al intentar abrir una cuenta bancaria, lo que obliga a muchos a guardar dinero en efectivo en sus hogares. La expectativa de dinero suelto es el presunto motivo detrás de muchas de las invasiones de viviendas, incluyendo los recientes asesinatos en Canton, de los que los inmigrantes hispanos son víctimas desproporcionadamente. Algunas instituciones financieras permiten a las personas abrir cuentas sin

la necesidad de enviar información sobre su estatus migratorio; pero mientras que **organizaciones locales** como Mississippi Immigrants' Rights Alliance están activamente involucradas en la divulgación para resaltar esas instituciones y procesos, sigue habiendo una continua falta de acceso e incertidumbre a través de la comunidad.

Otro desafío para muchos estadounidenses indocumentados es el acceso a las licencias de conducir, que actualmente se niegan a los de Mississippi. Conducir es **esencial** para que muchos de nosotros viajemos al trabajo, y esto es especialmente cierto para los inmigrantes indocumentados cuyo trabajo en Mississippi ha sido **considerado** "vital para el pueblo estadounidense durante esta emergencia". Su falta de acceso a los privilegios de conducción no les impide ir a trabajar, simplemente hace que nuestras carreteras sean menos seguras al negar a una porción considerable de la población impulsora una educación adecuada en nuestras reglas de tráfico.

Varios **estados** (incluyendo DC y Puerto Rico) están aprobando leyes para dar privilegios de chofer a los inmigrantes indocumentados, reconociendo que estas leyes reducen el tráfico y los accidentes relacionados con el alcohol. Sin embargo, en lugar de seguir esta tendencia, algunas oficinas policiales en Mississippi han utilizado las licencias de conducir como una

herramienta para más antagonizar a la comunidad de inmigrantes. Según Vanessa, una inmigrante de México que ha vivido en Mississippi durante casi dos décadas, la ausencia de una licencia de conducir a menudo desencadena una llamada telefónica inmediata de las fuerzas del orden locales a ICE. El testimonio de la comunidad destaca cómo las sanciones que siguen han empeorado en los últimos años: las multas de tráfico menores que una vez se limitaron a varios cientos de dólares ahora coinciden regularmente o superan los \$1,000 para los hispanos (con un individuo reportando una multa de hasta \$10,000), y individuos arrestados a menudo se detienen hasta la llegada de ICE independientemente de si se paga o no su fianza.

El esquema de identificación de Mississippi perjudica activamente incluso a los inmigrantes documentados. Los no ciudadanos autorizados en Mississippi reciben una **identificación distinta** que destaca su estatus migratorio. La identificación que llama la atención sobre el estatus migratorio de un individuo levanta sospechas contra ese individuo, incluso por parte de la policía que podría **confundir** la falta de ciudadanía con la falta de documentación. Muchos inmigrantes documentados en Mississippi ahora llevan intencionalmente visas con ellos para comprobar su estatus migratorio cuando son detenidos en los bloqueos de carreteras.

Conclusión

La Orden **Ejecutiva 13768** de Donald Trump, que buscaba coaccionar más la colaboración inmigración local-federal, fue **revocada** a principios de este año, pero las prácticas dañinas que facilitó están en curso. En la audiencia de 2019 sobre las redadas de inmigración de Mississippi, el representante Bennie Thompson comentó: "... nuestras comunidades viven con miedo, la gente tiene miedo de salir de sus hogares, los niños están aterrorizados de ir a la escuela porque pueden regresar a casa para encontrar

a sus padres restantes desaparecidos, y las empresas locales están sufriendo". Un año y medio después, y ese trauma sigue siendo palpablemente **relevante**. Es urgente que las organizaciones locales, estatales y federales actúen en sus respectivas capacidades para que, en **palabras** del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, "poner fin de inmediato al trato inhumano e injusto a los inmigrantes". Nuestra salud, seguridad, economía y constitución dependen de esto.

Recomendaciones

Para organizaciones estatales y locales

Priorizar la seguridad pública y la vigilancia equitativa.

- Emitir pólizas y procedimientos detallados para garantizar una vigilancia imparcial.
- Ampliar el acceso a las formas de identificación emitidas por el gobierno.
- Haga que la educación de los conductores y los privilegios disponibles para los residentes de Mississippi independientemente de su estatus migratorio.
- Emitir una forma neutral de inmigración de la sangría del gobierno que es uniforme y accesible para todos los residentes de Mississippi

Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para abordar la vigilancia de las comunidades inmigrantes.

- Recopilar y publicar datos locales de arrestos y delitos relacionados con cualquier colaboración con ICE
- Diseñar mecanismos de queja seguros, accesibles y confiables.

Mejorar las relaciones policiales con las comunidades inmigrantes.

- Participar en la divulgación comunitaria, la educación y las líneas abiertas de comunicación con las comunidades de inmigrantes.
- Realizar capacitaciones regulares para oficiales e

investigadores sobre conciencia cultural y mejores prácticas para proteger y atender a las poblaciones inmigrantes.

- Contratar agentes de la ley bilingües, biculturales y/o culturalmente sensibles.

Para la administración Biden y las agencias federales

Reducir el uso de retenciones de ICE y otros acuerdos interinstitucionales.

- Poner fin al régimen de retenciones de ICE y restringir ICE a solicitudes de notificación de la liberación de una persona.
- Poner fin a cualquier acuerdo que permita a las fuerzas del orden locales participar directamente en la aplicación de la ley de inmigración.

Priorizar los derechos civiles.

- Ordenar al Departamento de Justicia (DOJ) que presente un informe disponible públicamente que:
 - Evalúe el alcance y el impacto en los derechos civiles del enredo entre las fuerzas del orden locales y las fuerzas del orden federales de inmigración civil y
 - Recomiende formas de abordar y mitigar estos riesgos.
- Ordenar las oficinas locales de ICE para llevar a cabo capacitaciones de libertades civiles y monitorear las prácticas policiales locales cuando sea pertinente